



Actores de la Ley 779

Por Hellen Ruíz Miranda*

A un año y dos meses de su entrada en vigencia la ley 779, ley integral contra la violencia hacia las mujeres, se ha visto fuertemente cuestionada por diversos actores sociales, y fue sometida a su primera reforma.

El 25 de septiembre, 84 diputados aprobaron la Reforma y Adición a la ley No. 779 y de reformas a la ley No. 641, Código Penal, que establece la mediación en delitos menos graves e instituye que ésta figura jurídica no procederá en delitos graves sancionados con pena de 5 a más años de

prisión. La reforma establece que se podrá realizar en casos de: violencia física si se provoca lesiones leves, violencia psicológica si se provoca daño a su integridad, violencia patrimonial y económica exceptuando la explotación económica de la mujer, intimidación o amenaza contra la mujer, sustracción de hijos, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, omisión de denunciar y obligación de denunciar acto de acoso sexual.

Además se agrega que la mediación solo será admisible cuando el acusado pre-

sente constancia de no tener antecedentes penales de los delitos considerados en esta ley. Esta constancia deberá ser emitida por el juzgado o juzgados donde el acusado hubiese tenido su domicilio en los últimos tres años, contados a partir de la fecha de inicio del proceso.

Dicha reforma a la ley 779 vulnera el derecho a vivir libres de violencia, a la no discriminación por causas de género y principalmente el derecho a la vida. Este elemento está dispuesto para la negociación de personas en igualdad de condiciones, y la dinámica de vio-



lencia por si misma crece y se fundamenta en la inequidad, en la que la subordinación de la mujer es una constante en un sistema social altamente machista.

Diversos grupos de poder levantaron sus voces en favor y en contra de esta reforma, entre los principales se encuentran:

Los poderes del estado, por ser el ejecutor principal de las políticas públicas cuentan con toda la infraestructura, recursos humanos y materiales para tomar la decisión más favorable a sus intereses, instituciones como la Asamblea Nacional y la Corte Suprema de Justicia tuvieron gran peso en la introducción de la petición de reforma y sus posterior aprobación con casi la totalidad de los votos.

Un **sector político** es determinante en la creación de cualquier política pública, encontrándose personas con puntos de vista a favor y contra de la reforma, pero que en la votación la mayoría se plegó a la decisión de la bancada del partido de gobierno.

La sociedad civil, integrada por organizaciones de de-

fensa de derechos humanos y grupos feministas incidió en la creación de la ley 779 y protestaron enérgicamente contra la inclusión de la mediación. Su nivel de influencia sobre el tema de la reforma fue bajo dado que se limitó a implementar actividades de denuncia y protesta pública que no tuvieron gran eco entre los legisladores afines al partido de gobierno.

Por otro lado, surgieron voces de la sociedad civil a favor de la reforma como el de **un grupo de abogados** que afirma no estar de acuerdo con la ley. Este grupo introdujo recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y se pronunciaron a favor de la reforma. Ambos grupos son representativos de la opinión de la población en general dividida en dos.

Por último se encuentra el **sector religioso** que tiene gran influencia en la sociedad. Representantes de las iglesias católicas y evangélicas han declarado su rechazo abierto en lo formulado en algunos de los artículos de la ley. Estos planteamientos de las jerarquías religiosas tuvieron gran incidencia en la reforma a la ley 779.

Es importante resaltar que con la aprobación de la reforma a la ley 779 la población más afectada son las mujeres. La reforma vulnera el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia que es un derecho inherente a todo ser humano.

Los sectores con más influencia en esta reforma fueron: La Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el sector religioso y el poder ejecutivo como tomador final de la decisión, lo que evidencia que los sectores con mayor influencia estaban a favor de la reforma a la ley 779.

Para finalizar debo decir que uno de los retos en este contexto es brindar información adecuada a las mujeres para **que sepan que la mediación es voluntaria, se les debe acompañar** en sus procesos judiciales y **fiscalizar** que el sistema les brinde acceso a la justicia y cumpla con los objetivos por los que se creó la ley 779, proteger a las mujeres de las diversas formas de violencia de género.

* Estudiante de la Maestría en Gerencia Social - V Edición